

**SENTENCIA DEFINITIVA**  
**Juzgado Primero de lo Mercantil**

Aguascalientes, Aguascalientes; cinco de octubre del año dos mil dieciocho.

**VISTOS**, para resolver los autos del expediente número **2356/2018** relativo al juicio que en la vía **EJECUTIVA MERCANTIL** promueve **PEDRO PLASCENCIA FEYNOSE** en contra de **MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS** sentencia definitiva que hoy se dicta bajo los siguientes:

**CONSIDERANDOS:**

I.- Establece el artículo 1324 del Código de Comercio que: "Toda sentencia debe ser fundada en ley y si ni por el sentido natural ni por el espíritu de ésta se puede decidir la controversia se atenderá a los principios generales de derecho tomando en consideración todas las circunstancias del caso".

A su vez el artículo 1327 del citado ordenamiento jurídico establece que: "La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación".

II.- Conforme a los criterios doctrinales la competencia es la porción de jurisdicción que la Ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios; de ella derivan los derechos y obligaciones de las partes de que se ha hecho mérito.- Bajo este concepto se puede entender que la competencia presupone la jurisdicción y siendo así, conforme a lo que es dispuesto en el artículo 1090 del Código de Comercio, toda demanda debe interponerse ante Juez competente.- El actor en el juicio funda sus pretensiones en el documento mercantil tipo pagaré que suscribiera la demandada **MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS** en fecha **nueve de diciembre del año dos mil quince** a los que se señalara como fecha de su vencimiento el día **treinta de diciembre del año dos mil quince**, documento que en original se exhibiera junto con el escrito inicial de demanda y que se tiene a la vista al momento de dictarse la presente resolución, señalándose como domicilio de la demandada el ubicado en **MORROCO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO DEL FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, de**



esta ciudad, domicilio éste en el que se le requirió de pago y se le emplazara en forma y términos de ley, lo anterior según actuaciones que de lo anterior obran glosadas a fojas trece frente de los autos, lo que conlleva a determinar que este Tribunal si tiene Competencia para conocer del presente juicio, en razón a que el artículo 1104 fracción I del ordenamiento jurídico que se cita deduce que, será competente para conocer del negocio el Juez del lugar que la deudora haya designado para ser requerida de pago.

III.- En el caso que nos ocupa, la actora PEDRO PLASCENCIA REYNOSO demanda a MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS en el ejercicio de la acción cambiaria directa, por el pago de la cantidad de CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL por concepto de suerte principal, el pago de los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción y el pago de gastos y costas que se devenguen con motivo de la tramitación del presente asunto, fundando sus pretensiones como ya se ha hecho en el documento que lo es base de su acción, título correspondiente a un pagaré que en original se exhibiera junto con el escrito inicial de demanda y que resulta necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna, conforme lo prevé el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, señalando en el sexto de los hechos de su demanda que en la fecha de vencimiento del mencionado pagaré, se requirió del importe de dicho documento a la demandada negándose a hacer el pago a pesar de las múltiples gestiones hechas por su parte.

IV.- Por su parte la demandada MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS no dio contestación a la demanda entablada en su contra ni opuso excepciones ni defensas.

V.- En lo relativo a la procedencia de la vía ejecutiva mercantil que se intenta, en razón de que el documento fundatorio de la acción es de los previstos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, disposición legal ésta en la que se señala que, el pagaré debe reunir los requisitos que en el mismo se señalan, y al efecto el suscrito Juez de los autos estima que la misma ha quedado debidamente acreditada con los títulos a que se hace mención y que resultan necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, acorde a lo que para ello es dispuesto por el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de



Crédito, documento que conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1391 del Código de Comercio lo son de aquellos que traen aparejada ejecución, la que se deduce para hacer posible la efectividad en su cobro.

VI.- La acción cambiaria directa, y que lo es promovida por la parte actora, ha quedado probada en autos en atención a las siguientes consideraciones: El documento fundatorio de la acción, por ser título ejecutivo que sirve como base y fundamento para ejercitar el derecho que en él se consigna, conforme lo establece el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de documentos tienen el valor de prueba preconstituida, según y como se deduce de la que a continuación se transcribe.

**“TÍTULOS EJECUTIVOS, SON PRUEBA PRECONSTITUIDA.-** Los documentos que la Ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción.”

Quinta época. tomo XXXII, Pág. 1150 Amparo Civil directo 2002/30/3ra. Secc. Cuevas Rodolfo. diez de julio de mil novecientos treinta y uno. unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona ponente. Tomo XXIX. Pág.. 922. Recurso de suplica 191/32. Rodríguez Manuel. siete de octubre de mil novecientos treinta y tres. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona ponente.- Tomo XL, Pág. 2484.- Recurso de suplica 265/33/sec. de acdos. Rovalo Fernández Luis doce de marzo de mil novecientos treinta y cuatro. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona ponente.- Tomo XLI, Pág.. 1321. Recurso de suplica 169/33/sec. de Acdos. ingenio "Santa Fe", S.A. cuatro de julio de mil novecientos treinta y cuatro unanimidad de cuatro votos cinco, la publicación no menciona ponente.- Nota: Los datos que señalan para los apéndices a los tomos L y LXIV (quinta época) corresponden a las partes tercera y cuarta, respectivamente, Sección Civil.-

Quedó demostrado en autos que la ahora demandada **MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS** en fecha **nueve de diciembre del año dos mil quince** suscribió el documento mercantil tipo pagaré que se anota, por así desprenderse del título que lo es fundatorio de la acción, el cual fuera elaborado a favor de la parte actora **PEDRO PLASCENCIA REYNOSO** valioso en la cantidad de **CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL** acorde lo anterior a lo que literalmente fuera consignado a la letra en el título de crédito, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que sí puede desprenderse del que en original se exhibiera junto con el escrito inicial de demanda, acorde a su vez a la naturaleza jurídica del documento como una prueba preconstituida de la acción y donde por ende, el término dilatorio que ahora se concede en el juicio lo es para que la parte demandada pruebe sus excepciones y defensas y no para que la parte actora demuestre su acción, teniendo pues aquéllos pleno valor demostrativo que debe ser destruido, en



su eficacia, por las excepciones que se hagan valer, conforme lo establece para ello el artículo 1194 del Código de Comercio.

En razón de lo anterior y considerando, conforme se desprende de lo actuado en autos y de la propia prueba presuncional, de conformidad con lo contenido en el artículo 1305 del Código de Comercio, que no existe duda sobre la existencia del título de crédito y que con base a la característica de literalidad del mismo, se acredita la existencia de la obligación cartular a cargo de los demandados, así como la suscripción por su parte del pagaré base de la acción, permite resulte procedente la acción que se ejercita en términos de lo contenido en los artículos 150 y 151 de la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

VII.- La demandada MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS, como ya ha sido anotada no proveyó contestación a la demanda entablada en su contra ni opuso excepciones ni defensas, no obstante que como ha sido asentado ya, dada la naturaleza jurídica del título de crédito al ser considerado como una prueba que se preconstituye en el juicio y donde por tanto es a la parte demandada a quien corresponde aportar los elementos de prueba necesarios que les permitan desvirtuar el contenido y alcance de lo consignado en los documentos, vigilando además del correcto y oportuno desahogo de sus probanzas, acorde a lo que para ello se establece en el artículo 1194 del Ordenamiento Mercantil resultando aplicable a lo anteriormente asentado la siguiente tesis jurisprudencial:

**“PRUEBA, CARGA DE LA. EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES.**- De lo preceptuado en el artículo 1194 del Código de Comercio, se desprende que en los juicios Ejecutivos Mercantiles es a la parte demandada a quien corresponde la carga de la prueba de sus excepciones y defensas.- Por lo tanto, es a ella a quien incumbe aportar al juicio todos los medios de prueba con el objeto antes indicado y, además, vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que haya ofrecido y le sean admitidas

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Amparo Directo 790, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época tomo XIV julio de 1994, primera parte, pág. 732.

En base al contexto señalado, se declara que procedió la vía ejecutiva mercantil y en ella la parte actora probó su acción intentada y que la demandada no dio contestación a la demanda ni opuso excepciones ni defensas.

Por tanto, se condena a MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS a pagar a favor de la parte actora PEDRO PLASCENCIA REYNOSO la cantidad de **CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL** por concepto de suerte principal.



Se condena a MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS a pagar a favor de PEDRO PLASCENCIA REYNOSO un interés moratorio al **tres punto cero ocho por ciento mensual, es decir treinta y siete por ciento anual**, exigible a partir del día **treinta y uno de diciembre del año dos mil quince**, día siguiente a la fecha que se estipuló como la de vencimiento en el documento base de la acción y hasta que se haga pago total de lo adeudado, ello que sea regulado conforme a derecho en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

La condena de pago a la demandada por concepto de intereses moratorios a que refiere el párrafo que antecede resulta procedente, ello no obstante al hecho de que en el pagare basal consta expresamente la estipulación de que para el caso de mora el demandado habría de cubrir por concepto de intereses un porcentaje al razón del **cuatro** por ciento mensual, pero atendiendo al principio de congruencia que debe de mediar en las sentencias acorde a lo que dispone el artículo 1077 del Código de Comercio en el sentido de que lo resuelto en juicio no debe de ir más allá de lo pedido, es por ello que se condenó al demandado solo a pagar un porcentaje por concepto de intereses a razón del **treinta y siete por ciento anual, es decir un tres punto cero ocho por ciento mensual** que fue lo que solicito en su demanda por este concepto, aunado al hecho de que el porcentaje solicitado por intereses, no se basa en los límites establecidos en la ley.

En cuanto a la diversa prestación que refiere en el inciso b) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, la misma deviene de inatendible y por ende improcedente, esto es así ya que la propia parte actora pierde de vista que el título de crédito base de la acción es un título ejecutivo y conforme a lo que dispone los artículos 1391 fracción IV del Código de Comercio y 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito solo puede hacerse efectivo el derecho literal que en el propio documento se consigna, esto es únicamente a lo que se obliga quien suscribió el documento base de la acción y no así al pago de prestación que no se haya estipulado en el propio documento, lo que en el caso acontece con la prestación marcada con el inciso b) cuya prestación no se encuentra estipulada en el pagare basal.

No se hace especial condenación de costas, ya que en este caso, la parte demandada no fue condenada al pago de la totalidad de las



prestaciones reclamadas y por tanto, la condena fue parcial y por consiguiente al ser parcialmente procedentes las prestaciones de la demandada **MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS**, implica que ambas partes fueron vencedoras en el juicio en forma parcial de ahí que ante tales circunstancias sería incongruente condenar a ambas a pagarse mutuamente las costas entre sí; a este respecto resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial.

**"COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE CONDENAR AL DEMANDADO A PAGARLAS CUANDO EL ACTOR NO OBTIENE LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS.** El artículo 1084 del Código de Comercio es del siguiente tenor: "... Siempre serán condenados: ... III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable ...". De la transcripción anterior, se desprende que en el precepto de que se trata se establece la condena forzosa, tanto para el demandado que es condenado en un juicio ejecutivo, como para el actor que no obtiene sus pretensiones en un juicio de tal naturaleza. En este sentido, si el demandado es condenado parcialmente a cubrir las prestaciones reclamadas, y el actor obtiene sólo parte de sus pretensiones, resulta evidente que no puede condenarse al enjuiciado a pagar al demandante las costas del juicio, pues la misma razón existiría para condenar al actor a cubrirle aquéllas al demandado. La expresada interpretación resulta congruente con la ratio juris del citado precepto, que es la de sancionar, tanto al demandado que sin razón justificada oponga excepciones para destruir la eficacia de un título ejecutivo, como al actor que pretenda obtener reclamaciones improcedentes mediante la promoción de un juicio ejecutivo. En este sentido, resultaría aberrante que si el actor pretendiera obtener más de lo que en justicia le debiera su deudor, se impusiera a éste la carga de cubrir las costas judiciales erogadas por su contraparte, por el hecho de haberse excepcionado con el propósito de que no se le condenara al pago de una prestación no adeudada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 61/97. Arturo Hernández Andrade. 27 de febrero de 1997. Mayoría de votos. Disidente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.

Hágase trance y remate de los bienes embargados en este negocio y con su producto páguese al acreedor todos y cada una de las prestaciones que reclama si la deudora no lo hiciere en el término de ley.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 1321, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, del Código de Comercio es de resolverse y se resuelve:

**PRIMERO.-** Este Tribunal es Competente para conocer del presente negocio.

**SEGUNDO.-** Procedió la Vía Ejecutiva Mercantil y en ella la parte actora PEDRO PLASCENCIA REYNOSO acreditó la existencia de los elementos de su acción cambiaria directa y la procedencia de sus prestaciones y que la demandada **MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS** no dio contestación a la demanda presentada en su contra ni opuso excepciones ni defensas.

**TERCERO.-** Se condena a la demandada **MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS** al pago a favor del actor de la cantidad de **CIENTO DIEZ**



**MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL** como suerte principal.

**CUARTO.-** Se condena a MARÍA DE SAN JUAN REYES RAMOS a pagar a favor de PEDRO PLASCENCIA REYNOSO un interés moratorio al **tres punto cero ocho por ciento mensual, es decir treinta y siete por ciento anual**, exigible a partir del día **treinta y uno de diciembre del año dos mil quince**, día siguiente a la fecha que se estipuló como la de vencimiento en el documento base de la acción y hasta que se haga pago total de lo adeudado, ello que sea regulado conforme a derecho en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

**QUINTO.-** Se absuelve a la demandada de la prestación marcada con el inciso b) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, ello en base a las razones que se presentaron en el cuerpo de la presente resolución.

**SEXTO.-** No se hace especial condenación en costas.

**SÉPTIMO.-** Hágase trámite y remate de los bienes embargados en el presente negocio y con su producto páguese al acreedor todas y cada una de las prestaciones que demanda si la deudora no lo hiciere en el termino de Ley.

**OCTAVO.-** Con fundamento en lo que es dispuesto en el artículo 10 en relación al artículo 3º, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, y en el diverso artículo 1079, fracción VI, del Código de Comercio en vigor, requiérase a las partes del proceso para que, dentro del término legal de tres días manifiesten de su oposición a la publicación de la sentencia, una vez que la misma haya causado ejecutoria, respecto de sus datos personales que se contengan en la ejecutoria, en razón de la protección de derechos familiares, de terceros, del honor y las buenas costumbres, en la inteligencia de que tal oposición deberá ser solicitada y justificada mediante el incidente respectivo, conforme a las reglas que para su sustanciación se contengan en las normas que regulan el proceso, determinado que sea de ello por interlocutoria correspondiente.- Notifíquese.

A S I, lo sentenció y firma el licenciado **ALEJANDRO CALDERÓN DE ANDA**, Juez Primero de lo Mercantil en el Estado, por ante su Secretaria de Acuerdos licenciada ROSA MARÍA LÓPEZ DE LARA, con quien actúa y autoriza.- Doy Fe.



**PODER JUDICIAL**

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Esta resolución se publicó en la lista de acuerdos, que se fijó en estados en términos del artículo 1068 del Código de Comercio con fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho.- Conste.-

L´JRP/erika\*

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDUCIARÍA